

SOLUCIONES/ LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN CONSTITUYE UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA QUE LA CLASE POLÍTICA DIERA MUESTRAS DE QUE SE TOMA EN SERIO SU TRABAJO Y BUSCA SOLUCIONES MÁS ALLÁ DE LOS INTERESES PARTIDISTAS.

El cascabel, los impuestos y la salida de la crisis

ANÁLISIS por Salvador Arancibia

Los responsables de Banco Santander han decidido (se supone que lo harán el resto de entidades financieras en un futuro cercano) advertir a sus potenciales inversores sobre la posibilidad de que el Gobierno, dentro del programa de salida de la crisis, acabe poniendo en marcha su promesa anterior de elevar el mínimo del Impuesto sobre Sociedades hasta el 18% para los bancos y el 15%, para el resto de compañías, e incluso que pueda haber otros impuestos nuevos que ayuden a pagar la factura que la crisis está generando ya.

No hay nadie que en estos momentos, con una paralización casi completa de la actividad económica de la que se está saliendo con mucha prudencia, no haya aceptado que lo primero es preservar la salud y luego no permitir que “nadie se quede atrás”, sean estas personas o empresas. La ortodoxia económica hace tiempo que se abandonó ante la magnitud de la crisis y ha parecido bien que se instrumente el mecanismo de los ERTE, que cuestan varios miles de millones de euros mensuales a las arcas públicas; que el ICO avale préstamos que los bancos reconocen que sin esa garantía nunca darían a quienes se los solicitan; que haya habido un aplazamiento en el pago de los impuestos correspondientes (IVA e IRPF), para que empresas y autónomos no sucumban por falta de liquidez al no tener ingresos, e incluso que se haya discutido la posibilidad de que se instrumente el ingreso mínimo vital (con la consideración que se le quiera dar), para evitar que la pobreza alcance proporciones desorbitadas.

A nadie le parece inconveniente en estos momentos que se discutan planes concretos de sectores productivos que, por sus especiales características, van a tardar más tiempo en recuperar su normalidad, sean estos el sector del automóvil, el del turismo, la hostelería, la cultura, la agricultura o cualquier otro. Se trata de intentar salvar lo más posible, aun sabiendo que una parte de todos ellos es probable que se quede en el camino. Dos consejeros delegados de grandes bancos (Gonzalo Gortázar de Caixa-Bank; y Jaime Guardiola de Sabadell) han pedido recientemente que se den ayudas directas a las empresas para que puedan sobrevivir.

Las autoridades han presionado para que los bancos y el resto de las empresas retengan los dividendos a sus accionistas para reforzar las compañías, aun sabiendo que la realidad impondría estas cautelas por sí misma, lo mismo que está ocurriendo con los aplazamientos de pagos de réditos o



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de espaldas, se dirige al Congreso.

Ningún partido ha pensado en un impuesto temporal a familias y empresas para la reconstrucción

de alquileres. Se sabe que es momento de que todos acepten sacrificios. A pesar de esto, lo que está claro es que la factura va a ser muy elevada.

La factura que hay que pagar

Una factura, a pagar por toda la sociedad, que según los cálculos más optimistas supondrá que el déficit público este ejercicio esté al menos en el 10% del PIB nacional. En el primer trimestre de este año el PIB se situó muy cerca de los 300.000 millones de euros, lo que daría en cómputo anual 1,2 billones de euros en condiciones normales, pero como estamos en una profunda recesión y se supone que la economía caerá en torno a un 8% este ejercicio, el PIB anual apenas superará ligeramente los 1,1 billones de euros. Es decir, que el déficit público estará por encima de los 100.000 millones de euros. Y en 2021, aunque la economía crezca de manera clara y el déficit baje en relación con el PIB, se-

guirá siendo una cantidad importante que habrá que financiar.

La cuestión es cómo se hace. El Banco de España, que no es precisamente un modelo de ruptura teórica y que en estos momentos ha sido un firme partidario de la heterodoxia económica para parar los golpes más duros de la crisis, siempre ha señalado que hay tres maneras de hacerlo: reduciendo gastos, subiendo impuestos o una mezcla de las dos anteriores. No hay otra. Y viene llamando de forma reiterada a que se vaya pensando qué se va a hacer cuando la crisis amaine.

Parece que está claro qué es lo que hay que hacer ahora. Las discrepancias surgen sobre las actuaciones futuras. Por convicción propia o por imposición de la Unión Europea, es evidente que habrá que caminar por la senda de la consolidación fiscal, es decir, por la reducción progresiva del desequilibrio entre ingresos y gastos públicos.

Y aquí es donde surge el problema. La doctrina liberal aboga no por mantener los impuestos, sino, incluso, por bajarlos, por entender que ello daría alas a la actividad económica y, consiguientemente, más ingresos gracias al

mayor crecimiento. Por su lado, la socialdemocracia, entiende que, en momentos de dificultades, quienes más tienen (sean empresas o particulares) deben contribuir más al equilibrio de las Cuentas públicas.

Si la economía se empieza a recuperar, algo que se estima ocurrirá en todo caso a finales de este año y a lo largo de 2021, el gasto público debería sufrir menos tensiones al necesitarse menos apoyos del Estado a empresas y familias, al tiempo que, aunque poco, posiblemente, también se recuperarán los ingresos. El peso del déficit debería descender por la mayor actividad, los mayores ingresos y las menores necesidades de gastos.

La cuestión es que es evidente que será insuficiente para volver a una senda razonable y rápida de reducción del déficit, por lo que se hará necesario actuar sobre los gastos (la reforma de las pensiones se hace cada vez más ineludible, junto con la claridad de las cuentas de la Seguridad Social, y también volverá a hablarse de la eterna reforma de la Administración justo en unos momentos en los que había un amplio programa de aumento de los empleados públicos para recuperar al menos parte de lo perdido en los años de la anterior crisis), pero también sobre los ingresos.

Y aquí es donde entran en juego tanto las anteriores decisiones del Gobierno, que no se pusieron en marcha porque no hubo nuevos presupuestos del Estado (mínimo del Impuesto de Sociedades, subida del IRPF para las rentas más altas, subidas del impuesto sobre el rendimiento del capital, *tasa Google*, transacciones financieras...), como la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto a las grandes fortunas que ha vuelto a reivindicar. Parece que a nadie se le ha ocurrido que una posibilidad podría ser la creación de una tasa (a empresas y familias) por un periodo de tiempo tasado e inamovible para la reconstrucción de la economía del país, es decir, para pagar al menos una parte de la factura. De otra forma es bastante probable que se vuelva a hacer lo de siempre, que es trasladar a las generaciones futuras el coste de los problemas generados hoy.

El foro de discusión de todo esto podría haber sido la mesa de partidos y agentes sociales para la reconstrucción nacional que propuso el PSOE y que finalmente, por decisión del PP, ha quedado en una comisión del Congreso cuyas conclusiones, sean cuales sean, no tendrán carácter vinculante. Hay mucha incredulidad sobre los trabajos de esta comisión, pero sería una buena ocasión para que la llamada clase política diera muestras de que se toma en serio su trabajo y busca soluciones más allá de los intereses partidistas.

Hacienda confirma que revisará el reparto del fondo de CCAA

P.C. Madrid

El Gobierno revisará el criterio del reparto de fondos para el coronavirus entre las comunidades autónomas, con el objetivo de dar más peso a la población en detrimento de otros factores, como puede ser el impacto sanitario. Con ello, trata de apaciguar a aquellas regiones que se habían quedado atrás en el acceso a este fondo común de 16.000 millones de euros para hacer frente al impacto causado por la crisis sanitaria.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer en el Senado que el Ejecutivo trabaja con el objetivo de que “el criterio de población tenga mayor peso en la asignación global” de dinero. En su respuesta al senador de Més Vicenç Vidal Matas que reclamaba en la Cámara Alta una mayor financiación para Baleares, la ministra Montero indicó que se dará “una respuesta equitativa y moderada” que satisfaga “al conjunto de los territorios”. Además, dijo que el Gobierno entiende las “legítimas aspiraciones” de todos los territorios pero su obligación es “armonizar” sus necesidades y demandas.

Golpe económico

Aunque parece razonable que el impacto sanitario de la pandemia en los distintos territorios fuera el principal criterio de asignación de fondos, algunas comunidades consideraban que esto dejaba fuera o minimizaba otros aspectos. Por ejemplo, el Govern Balear considera que Baleares debería tener una atención especial por ser un territorio cuya actividad económica depende en gran parte del turismo, lo que incrementará el golpe sobre la economía. De hecho, BBVA Research espera un desplome del PIB de Baleares superior al 17% este año, por lo que las islas acusarán un golpe económico cercano al doble de la media española.

“Les Illes Balears vamos a recibir menos porque hemos hecho nuestro trabajo y nos hemos endeudado para tener una salud pública potente”, señaló en este sentido el senador de Més, que reclamó que se tuviera en cuenta el peso del sector turístico. “Les pedimos ese esfuerzo porque siempre las inversiones en las Islas Baleares están por debajo de la media”, añadió.